

Un peligroso vacío de seguridad

La actual situación egipcia ha aumentado la inestabilidad en la conflictiva península del Sinaí

Teniente coronel Mario A. Laborie Iglesias

Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

La península del Sinaí ha constituido históricamente una zona estratégica de separación entre Israel y Egipto. Este carácter geopolítico de *buffer* (amortiguador, tapón) quedó ratificado con los acuerdos de paz de Camp David, firmados entre el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin en 1978. Tras la ocupación israelí, consecuencia de la guerra de 1967, la entrada en vigor de los acuerdos de paz devolvió a los egipcios una soberanía condicionada sobre ese territorio. Durante las siguientes décadas, la desmilitarización de la península garantizó a ambos países seguridad y estabilidad en su frontera común. También, permitió a las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF en siglas en inglés) mantener una presencia limitada en la zona.

No obstante, en los últimos años sucesivos acontecimientos han venido a indicar cómo la otrora relativa tranquilidad de la zona se ha desvanecido. Más allá de las reclamaciones políticas de la población beduina hacia el gobierno de El Cairo, el contrabando de todo tipo, la creciente presencia de yihadistas, la pugna entre los distintos actores regionales, el terrorismo y los secuestros constituyen un coctel explosivo para la frágil estabilidad de Oriente Próximo. Buena prueba de ello es el atentado del pasado 5 de agosto contra un puesto fronterizo cerca de Israel en el que un presunto grupo yihadista asesinó a 16 soldados egipcios y robó un blindado para dirigirse a suelo israelí.

Se estima que unas 400.000 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a alguna de las 13 tribus beduinas naturales de la zona, habitan en la península del Sinaí. En 1906, los imperios británico y turco acordaron la linde de separación entre ambos. Esa partición, que no tuvo en cuenta la realidad de las tribus beduinas, se convirtió a partir de 1948 en la divisoria permanente entre Egipto e Israel. Hoy en día, esta frontera es considerada por los beduinos una mera línea dibujada en el mapa. Es importante señalar que desde el punto de vista de la identidad nacional la mayoría de los beduinos no se sienten egipcios. En el duro desierto del Sinaí, los beduinos han practicado durante generaciones un código basado en el parentesco, el honor, la hospitalidad y la venganza. Este código tribal, denominado *urfi*, ha regulado el orden y la justicia en la zona con independencia de las instituciones estatales. Además, esta autonomía *de facto* se ha visto fomentada por la falta de control efectivo sobre la zona por parte de las autori-

dades egipcias; lo que paradójicamente no ha evitado continuos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, sobre todo en los últimos años. Las tribus de la península, especialmente las del norte, se han quejado reiteradamente de que el gobierno les deja fuera de cualquier proyecto económico de mejora, tal y como señala el alto índice de desempleo existente. El Sinaí sufre de graves carencias tanto en infraestructuras, especialmente en lo que respecta a la distribución de agua, como en programas de desarrollo humano. Asimismo, existe un sentimiento de agravio debido a que los recursos obtenidos del turismo se quedan en manos de personas provenientes del Valle del Nilo.

Los beduinos han atacado comisarías de policía y han bloqueado el acceso a las ciudades para mostrar su descontento con una situación que califican como represora por parte del gobierno central. La acción policial, con detenciones masivas de activistas, ha desencadenado una espiral de reacciones. En febrero de 2012, algunos beduinos secuestraron a tres mujeres coreanas y a su traductor egipcio, en el tercer incidente similar en el mismo mes. También en febrero, dos docenas de chinos, trabajadores de una fábrica de cemento, fueron retenidos por la fuerza. En todos los casos, para la liberación de los secuestrados se solicitaba la liberación de presos políticos, aunque no faltan las voces que sugieren la motivación económica como la causa real de los hechos.

Ante las bajas expectativas, el escenario de pobreza y la represión policial, los beduinos se encuentran ante la alternativa de viajar en busca de trabajo, abandonado sus tierras y tradiciones, o dedicarse a cualquiera de las múltiples actividades delictivas que han proliferado exponencialmente en los últimos años. Desde productos tradicionales, a drogas, armas y seres humanos, el contrabando se ha convertido en una práctica muy rentable, aunque ciertamente muy peligrosa. Los Toyota *pick-up*, armados con ametralladoras pesadas, ya muy familiares en otros conflictos, han sustituido a los camellos y proporcionan a los traficantes autonomía, capacidad de movimiento y potencia de fuego. Los ingresos derivados de estas actividades ilícitas podrían encontrarse entre 300 y 3.000 millones de dólares anuales.

Una de las formas más lucrativas de negocio se encuentra ligada a la emigración ilegal. Como si fuera un nuevo éxodo, cada año varios miles de africanos, la mayoría de ellos procedentes

El contrabando se ha convertido en una importante actividad económica en el Sinaí

de Eritrea y Sudán, tratan de llegar a Israel atravesando el desierto del Sinaí. En su penoso viaje, cientos de ellos están siendo retenidos como rehenes por los propios traficantes que exigen hasta 40.000 dólares a cada uno por su liberación. No obstante, la maldad humana no se detiene en este punto. Algunas fuentes han señalado también la existencia de tráfico de órganos extraídos a los emigrantes.

Es indudable que otro factor dinamizador del contrabando es la situación de bloqueo que vive la franja de Gaza. El bloqueo israelí de ese territorio ha abierto un gran mercado. Con la ayuda de las redes de contrabandistas de la zona y la complicidad de algunos miembros de la policía egipcia, a través de túneles que comunican con Egipto entran en Gaza productos de primera necesidad, y también armas y explosivos. Existe asimismo un preocupante flujo de salida desde el territorio palestino. Por el reabierto paso de Rafah o por los túneles que comunican ambos lados de la frontera, se sospecha que miembros yihadistas, ligados a Al-Qaeda, se infiltran en el Sinaí para desde allí actuar contra intereses israelíes. Algunos medios han informado de la existencia de cierta coordinación entre Hamas y el ejército egipcio para controlar estos movimientos.

Coincidiendo en el tiempo con la revolución popular egipcia, la actividad de estos grupos armados, algunas veces denominados *Al-Qaeda en la Península del Sinaí* no ha dejado de crecer en los últimos meses. Se estima que en la actualidad entre 400 o 600 yihadistas tienen su base de operaciones en el norte del Sinaí. Aunque las acciones que han llevado a cabo no han alcanzado todavía la magnitud del periodo 2004-2006, en donde una serie de ataques contra intereses

turísticos en la costa del Mar Rojo mataron a más de 130 personas, la preocupación en la zona es evidente. Además de lo ocurrido este mes de agosto, ya el verano pasado se produjo un ataque contra dos autobuses militares y varios vehículos civiles en las proximidades de la ciudad israelí de Eilat, dejando un saldo de seis israelíes y ocho asaltantes muertos. En la posterior persecución llevada a cabo por los israelíes, ya dentro del territorio egipcio, cinco guardias fronterizos egipcios cayeron también abatidos por disparos de las IDF. Estas muertes destaparon en Egipto el sentimiento anti-israelí y provocaron una crisis diplomática que aun hoy no se ha solucionado.

Por otro lado, el gasoducto que atraviesa el Sinaí y que abastece de gas natural a Israel y Jordania es objeto de continuos ataques. Desde la caída del ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, el gasoducto ha sido sabotado 13 veces, paralizando el suministro y causando graves pérdidas económicas. Israel recibe de Egipto cerca del 40 por 100 de sus necesidades de gas. El acuerdo de venta entre los países es profundamente impopular en el país árabe y el depuesto presidente Mubarak ha sido acusado de infravalorar el precio del gas y de beneficiarse personalmente del contrato.

Todas estas circunstancias señalan un creciente deterioro del entorno de seguridad ante el cual Israel ha empezado a tomar medidas. Quizás la más llamativa sea la construcción de una valla, de cinco metros de alto, que recorrerá los 240 kilómetros de su frontera común con Egipto. El objetivo no es otro que dificultar el tránsito tanto de grupos armados como de emigrantes ilegales. Las críticas a su construcción provienen de las tribus beduinas que ven como peligran sus tradicionales prácticas nómadas y también el contrabando, única fuente de ingresos en muchos casos.

Por otro lado, por parte egipcia, se ha venido reiterando que los acuerdos de Camp David necesitan ser revisados. Estos acuerdos sólo permiten el despliegue de un número limitado de fuerzas de seguridad egipcias lo que explicaría su incapacidad para imponer el orden y el vacío de seguridad en la zona. No obstante, abrir un proceso de revisión del tratado de paz, que en todo caso debe ser de mutuo acuerdo de las partes, puede resultar arriesgado en las actuales circunstancias. Los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales en Egipto, en las que los Hermanos Musulmanes obtuvieron el respaldo mayoritario de los votantes y fue elegido presidente el líder islámico Mohamed Morsi, no parecen el marco adecuado para establecer un proceso sosegado de negociación. Por ello, Israel ha ofrecido a cambio la adopción de

acuerdos técnicos puntuales que faciliten el despliegue de efectivos militares y policiales adicionales, pero sin modificar el contenido esencial del Tratado de Paz. Bajo esta premisa y con el imprescindible consentimiento israelí, el ejército egipcio puso en marcha tras el atentado del 5 de agosto el mayor despliegue militar en la zona hasta la fecha. La denominada *Operación Águila*, justificada con el objetivo de pacificar el área y capturar a los terroristas, es un claro ejemplo de la necesidad egipcia de controlar la inestabilidad en la península.

Ya en agosto de 2011, Egipto realizó otra *Operación Águila* con el objetivo de restaurar el orden en el Sinaí. Además en diciembre de 2011, Israel autorizó el despliegue de otros dos mil soldados egipcios en la península.

En resumen, la situación en la península del Sinaí recuerda a la existente en otras partes del globo en las que cuando las instituciones del Estado no están presentes o son débiles, otros agentes no dudan en ocupar su lugar. Organizaciones de crimen organizado, milicias, señores de la guerra u otros actores armados no estatales encuentran en estas zonas *sin ley* el medio óptimo en el que desarrollar sus actividades. La solución no es sencilla pero en cualquier caso debería pasar por el fortalecimiento de las instituciones del Estado, al mismo tiempo que se adoptan planes de desarrollo económico y social. No obstante, está por ver si las nuevas autoridades egipcias están realmente interesadas en el control efectivo del Sinaí, o si por el contrario, dejarán que se agrave la actual coyuntura. La consecuencia sería un incremento de la tensión entre Israel y Egipto y una nueva brecha en la desgarrada seguridad de Oriente Próximo. De cualquier forma es obvio que para Israel la calma en su frontera suroeste ha desaparecido y que se abre una nueva etapa de incertidumbre sobre una de las zonas más candentes del planeta. ■



STR/EE